

ECUADOR

Debate

CONSEJO EDITORIAL

José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira,
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga,
Fredy Rivera, Jaime Borja Torres, Marco Romero.

DIRECTOR

Francisco Rhon Dávila
Director Ejecutivo CAAP

EDITOR

Fredy Rivera Vélez

ECUADOR DEBATE

Es una publicación periódica del **Centro Andino de Acción Popular CAAP**, que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE.

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

EXTERIOR: US\$. 30

ECUADOR: S/. 110.000

EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US\$. 10

EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR S/. 40.000

ECUADOR DEBATE

Apartado Aéreo 17-15-173 B, Quito - Ecuador

Fax: (593-2) 568452

e-mail: Caap1@Caap.org.ec

Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito.

Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE.

PORTADA

Magenta Diseño Gráfico

DIAGRAMACION

Martha Vinueza

IMPRESION

Albazul Offset

ECUADOR DEBATE

48

Quito-Ecuador, diciembre de 1999

COYUNTURA

Nacional: Desencadenantes y beneficiarios de la crisis económica en el Ecuador / 5-24

Wilma Salgado

Política: La política de las autonomías / 25-36

Fernando Bustamante

Conflictividad social: Julio-Octubre 1999 / 37-50

Internacional: Mayor inestabilidad y menor crecimiento de la economía mundial en los años noventa / 51-66

Marco Romero

TEMA CENTRAL

La época de las identidades / 67-70

Sami Nair

Intelectuales indígenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador / 71-94

Hernán Ibarra

Ser Tsáchila en el Ecuador Contemporáneo: Un análisis desde la antropología / 95-118

Montserrat Ventura i Oller

Identidades colectivas y fundamentalismo indigenista en la era del pluralismo evolutivo boliviano / 119-140

H. C. F. Mansilla

¡Que tal raza! / 141-152

Aníbal Quijano

Conflictos étnicos y racionalidad política en la primera guerra Yugoslava (1991-1995) / 153-176

Pavel Barsa

Ejércitos, milicias y limpieza étnica / 177-180

Marc Saint-Upéry

ENTREVISTA

Presente y futuro del nacionalismo. Entrevista a Andrés de Blas Guerrero / 181-188
Hernán Ibarra

PUBLICACIONES RECIBIDAS / 189-196

DEBATE AGRARIO

Indicadores de sustentabilidad débil: pálido reflejo de una realidad mas robusta y compleja / 197-232

Fander Falconí

Formación del capital humano en técnicas agroecológicas en el agro peruano / 233-244

George Sánchez Quishpe

ANALISIS

Modernidad, cultura y juzgamiento / 245-264

Romel Jurado V.

Derechos laborales en el comercio internacional: Experiencias de la Cláusula Social / 265-288

Volker Frank

CRITICA BIBLIOGRAFICA / 289-292

Fernando García

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Julio-Octubre 1999

La situación por la que está atravesando en estos últimos meses el país confirma la idea de la fragilidad de las bases políticas de sostenimiento del régimen, ya que se minan con asombrosa rapidez las posibilidades de construir "adeptos", y no se producen actores sociales y políticos que se posicionen en torno de los planteamientos económicos y políticos del régimen. Las fracturas, arduamente soldadas por el presidente de la República y sólo por él, dentro del partido gobernante, sin duda han contribuido a la intensificación del desprestigio y la inconformidad con la conducción gubernamental de la crisis.

En el cuatrimestre julio-octubre de 1999 se observa, por un lado, un declive del conflicto social y político anclado en la polarización regional del país y, por otro, un repunte de la conflictividad laboral privada, activada por sectores empresariales contrarios a la política tributaria del régimen democratacristiano.

En efecto, luego de que en el mes de julio el gobierno decretara el incremento de los precios de combustibles y un nuevo esquema tributario, el país vivió una intensificación inusitada de protestas socia-

les -paros, bloqueos, amenazas- de sectores públicos y movimientos sociales. El bloqueo político llegó a tal punto que se requirió la mediación de un actor "extra-político", la iglesia, para posibilitar una mínima agenda de interlocución entre las facciones confrontadas.

Luego de dos semanas de negociación, especialmente con el movimiento indígena y el sector de los transportistas, se fijan los puntos del acuerdo: mantenimiento de los precios de los combustibles hasta julio del 2000, descongelamiento gradual de los ahorros y subsidio eléctrico a los más pobres.

El mes termina, sin embargo, con una masiva marcha convocada por el alcalde de Guayaquil, el Partido Social Cristiano y respaldada por las cámaras de la producción; su objetivo: condicionar al régimen para que rectifique por completo su actual política económica. El conflicto regional queda latente de esta forma en el escenario político nacional, más aún luego del frontal rechazo del gobierno a los pronunciamientos de sectores políticos y empresariales de Guayaquil.

Toda esta turbulencia social explica que, en el período analizado, el mes de julio concentre prácticamente el cuarenta por ciento del total de la conflictividad registrada. En los meses posteriores, la reducción de la turbulencia social es tan pronunciada que, en conjunto, este cuatrimestre presenta una tasa de decrecimiento cercana al 13% con respecto al anterior.

A pesar de las observaciones anteriores, y esto permite sostener la idea de un descenso de la conflictividad social-regional, al observar el género del conflicto se puede constatar un pronunciado declive, en relación con el período marzo-junio, de aquellos producidos por circunstancias cívico regionales (de 13% en el período anterior a 9% en el actual). Por el contrario, los ejes de la conflictividad se estructuran en torno de la agitación y malestar sociales provocados por los tópicos laborales, públicos y privados: más del sesenta por ciento de la beligerancia social registrada nace de la inconformidad con estas temáticas.

En el mismo nivel, al igual que en el período anterior, se puede apreciar que entre "pugna de poderes" y conflictos "político-partidistas" y "político-legislativos" suman cerca del 15% del total de conflic-

Número de Conflictos por mes

FECHA	Frecuencia	Porcentaje
Julio / 99	95	37.55%
Agosto / 99	45	17.79%
Septiembre / 99	66	26.09%
Octubre / 99	47	18.58%
Total	253	100.00%

tos detectados. Ello confirma la tesis, recurrente entre diversos analistas, de la precariedad y deficiencia política con que Mahuad y su cercano círculo de asesores han construido la estrategia de negociación, defensa y comunicación de su programa de reforma económica. Además, en este indicador se expresa la polarización que el tema de los impuestos y en general toda la proforma presupuestaria del 2000 ha ocasionado en el debate político nacional.

Género de Conflictos

GENERO	Frecuencia	Porcentaje
CAMPESINO	6	2.37%
CIVICO REGIONAL	24	9.49%
INDIGENA	16	6.32%
LABORAL PRIVADO	92	36.36%
LABORAL PUBLICO	61	24.11%
POLITICO LEGISLATIVO	10	3.95%
POLITICO PARTIDISTA	19	7.51%
PUGNA DE PODERES	7	2.77%
URBANO BARRIAL	18	7.11%
Total	253	100.00%

En correspondencia con lo anotado en líneas anteriores, al observar quienes han sido los protagonistas del conflicto social y político entre los meses de julio y octubre, se aprecia que los gremios -sectores de la salud y la educación públicas sobre todo- han sido los responsables principales del tipo de agitación social registrada: casi el 19% del total

de conflictos (cabría recordar que en el cuatrimestre anterior su participación era apenas el 8%). La emergencia beligerante de los empresarios en la esfera pública también es notoria: su aparición en el conflicto político en el período anterior llegaba al cuatro por ciento, mientras que en el actual esta tasa alcanza el catorce por ciento del to-

tal de casos revisados. Si a ello se añade la actuación pública-conflictiva de las cámaras de la producción (4%), estamos frente a un escenario político en que el régimen presidido por Mahuad ha perdido abiertamente la capacidad de maniobra con respecto al sector mercantil privado del país.

En este "tour de force" entre empresarios y gobierno habrían incidido directamente el anuncio de los resultados de las auditorías bancarias, la pugna por la reforma de la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos y, sobre todo, el debate en torno a la proforma presupuestaria y dentro de ella la reestructuración de la estructura impositiva del país. Si a estos elementos se agrega el componente regional -los sectores empresariales más fuertes y opositores al gobierno se asientan claramente en la provincia del Guayas- tenemos una caracterización elocuente del tipo de conflicto político que ha modelado a la democracia ecuatoriana desde su re-constitución: conjunción y penetramiento de agendas, necesidades e intereses privados y corporativos en la discusión -supuestamente racional, técnica y abierta- de los ejes, mecanis-

mos, estrategias y objetivos de la reforma del Estado. Borramiento y disipación de lo público-colectivo en nombre y por la vía de la constante presencia-dominio de intereses privados en la colocación y resolución del cambio económico e institucional que se habría buscado desde hace más de una década.

En un segundo nivel se ubican los partidos políticos, ya que han participado en la generación de más del 14% de los conflictos observados. Al igual que en el cuatrimestre anterior, conservan un perfil preponderante en la producción de turbulencia política y social. En esta ocasión las tirantes relaciones entre el ejecutivo y el legislativo están atravesadas por la interminable negociación de los términos del presupuesto del 2000.

Finalmente, la permanencia en la esfera pública del conflicto social de actores sociales como trabajadores, sindicatos e indígenas son una poderosa evidencia de una crisis política y económica que arrastra a todos, que transforma todos los espacios de interlocución en escenas de disputa, bloqueo y oposición contumaz.

Sujeto del Conflicto

SUJETO	Frecuencia	Porcentaje
CAMARAS PRODUCCION	10	3.95%
CAMPESINOS	6	2.37%
EMPRESAS	36	14.23%
ESTUDIANTES	5	1.98%
FF.AA.	1	0.40%
GREMIOS	47	18.58%
GRUPOS HETEROGENEOS	10	3.95%
GRUPOS LOCALES	9	3.56%
INDIGENAS	16	6.32%
ORGANIZACIONES BARRIALES	13	5.14%
PARTIDOS POLITICOS	36	14.23%
POLICIA	4	1.58%
SINDICATOS	26	10.28%
TRABAJADORES	34	13.44%
Total	253	100.00%

Al analizar el cuadro que registra el "objeto del conflicto" se puede apreciar una caracterización de las motivaciones que originaron los conflictos socio-políticos en el país. Así, cerca del treinta y siete por ciento de estos obedecieron directamente a manifestaciones de disgusto e inconformidad con respecto a la gestión gubernamental. Se trata de un dato que confirma la idea de la fragilidad de las bases políticas de sostenimiento del régimen: se mi-

nan con asombrosa rapidez las posibilidades de construir "adeptos", de producir actores sociales y políticos que se posicionen en torno de los planteamientos económicos y políticos de este gobierno. Las fracturas, arduamente soldadas por el presidente de la república y sólo por él, dentro del partido gobernante sin duda han contribuido a la intensificación del desprestigio y la inconformidad con la conducción gubernamental de la crisis

A ello cabe añadir las recientes denuncias, realizadas por el banquero Aspiazu, sobre un mal manejo de las donaciones económicas provenientes de diversas fuentes - entre ellas destaca las del propio expresidente del Banco del Progreso en la campaña electoral del presidente Mahuad y de algunos diputados afines al régimen. La renuncia de uno de los principales funcionarios del gobierno y responsable de la rendición de cuentas sobre los fondos de campaña -Ramón Yu Lee- dice mucho respecto del tipo de motivaciones que han conducido a que más del 21% de los conflictos detectados respondan al malestar por éstas y otras denuncias de corrupción.

El escasísimo margen de credibilidad y legitimación del régimen reposaba en la imagen de honestidad de Mahuad; de esa forma este recurso parece haberse agotado.

Ignominiosa evidencia de la forma en que se construye la democracia ecuatoriana: alianzas estratégicas pre-electorales entre banqueros, empresarios y políticos que deberán redituarse, por qué no decirlo, durante el transcurso del período de gobierno de aquellos políticos favorecidos. ¿Acaso el manejo que el gobierno ha hecho de la crisis bancaria, protección de las entidades quebradas e impunidad para los banqueros responsables, no muestra esta perversa economía de favores?

Objeto del Conflicto

OBJETO	Frecuencia	Porcentaje
DENUNCIAS DE CORRUPCION	54	21.34%
FINANCIAMIENTO	28	11.07%
LABORALES	11	4.35%
OTROS	38	15.02%
RECHAZO POLITICA ESTATAL	93	36.76%
SALARIALES	29	11.46%
Total	253	100.00%

En lo que se refiere a la localización del conflicto social en el período analizado, se presenta una fuerte variación con respecto a los cuatrimestres anteriores. Se trata de la reversión de una tendencia que venía consolidándose desde los tiempos en que el Fenómeno del Niño destruyó gran parte de la región litoral del país: la región litoral ha dejado de ser el mayor espacio de expresión de beligerancia social -aunque

sigue concentrando prácticamente la mitad de los conflictos registrados- para dar paso al resurgimiento de la Sierra como territorio de mayor agitación social (casi el 50% de los conflictos observados habrían sucedido en esta región). Claramente este dato confirma la idea, sugerida en el inicio de este comentario, de que ha declinado el matiz regional del conflicto.

Número Conflictos por regiones

REGION	Frecuencia	Porcentaje
AMAZONIA	12	4.74%
COSTA	114	45.06%
INSULAR	1	0.40%
SIERRA	126	49.80%
Total	253	100.00%

A pesar de lo anterior cabría sugerir la tesis de que el resurgimiento de la Sierra como el espacio de mayor concentración de los conflictos sociales en el país obedece, más a la extensión pronunciada del deterioro de la legitimidad del régimen demócrata-cristiano a todo el territorio nacional que a una pérdida significativa de presencia de la Costa en la agitación social. Así, si se

piensa que en la región andina se asienta la mayor parte de las bases electorales que sostuvieron la candidatura de Mahuad, se evidencia como incluso entre estos sectores se ha multiplicado el malestar frente al gobierno.

Esto es más evidente cuando se advierte que la provincia del Guayas continúa -y con índices prácticamente idénticos al período ante-

rior- como el espacio de mayor turbulencia social en el cuatrimestre julio-octubre (38%). La abierta confrontación entre Guayaquil y el gobierno nacional, cuya máxima expresión pública fue el beligerante intercambio de ideas entre Febres Cordero y Mahuad durante las fiestas octubrinas del puerto principal, escenifica y visibiliza que en esta disputa están en juego el apuntalamiento de las bases electorales de los dos más grandes partidos políticos del país: el Partido Social Cristiano, cuyas bases se concentran fundamentalmente en Guayas, y la Democracia Popular, el partido oficial.

Por fuera de esta polarización regional del debate público, debe advertirse una importante tendencia de surgimiento de "nuevas" áreas de expresión del conflicto: nos referimos a ciertas provincias de la Sierra que, hasta este punto de evolución de las políticas de gobierno, habían permanecido con un perfil bajo en el escenario del conflicto social. Se trata de provincias como Tungurahua y Chimborazo que, en comparación con períodos anteriores, aparecen como abiertamente más beligerantes frente al régimen. En este crecimiento habría incidido directamente la intensa actividad de

los sectores indígenas durante la crisis del mes de julio. Cabe recordar que, incluso, tales sectores llegaron desde todos los puntos de la geografía nacional a para "tomarse" la capital de la república en señal de rechazo y demanda de revocatoria de las medidas económicas tomadas por Mahuad.

Finalmente, el hecho de que se registre un crecimiento de la participación de Pichincha en la producción de conflictividad socio-política, obedecería a que el tópico "divisor de aguas" gira en torno de la proforma presupuestaria, debate cuyo locus natural es el Congreso Nacional y sus relaciones con el Ejecutivo. El carácter centralista del sistema político se evidencia también en esta generación localizada, en la capital del país, del conflicto social.

En otro orden de cosas, al estudiar la intensidad del conflicto -expresión de las modalidades de visibilización de las demandas y presiones de los diversos actores sociales- se puede constatar variaciones importantes respecto al cuatrimestre anterior. En primer término se ha reducido de manera vigorosa la concreción de acciones del tipo huelgas y marchas (del 40% anterior al 31% vigente); en segundo lugar, lla-

Número Conflictos por provincias

LUGAR	Frecuencia	Porcentaje
AZUAY	10	3.95%
BOLIVAR	1	0.40%
CARCHI	2	0.79%
CAÑAR	4	1.58%
CHIMBORAZO	10	3.95%
COTOPAXI	2	0.79%
EL ORO	5	1.98%
ESMERALDAS	3	1.19%
GALAPAGOS	1	0.40%
GUAYAS	96	37.94%
IMBABURA	1	0.40%
LOJA	3	1.19%
LOS RIOS	1	0.40%
MANABI	9	3.56%
MORONA SANTIAGO	1	0.40%
NAPO	3	1.19%
ORELLANA	1	0.40%
PASTAZA	3	1.19%
PICHINCHA	84	33.20%
SUCUMBIOS	2	0.79%
TUNGURAHUA	9	3.56%
ZAMORA CHINCHIPE	2	0.79%
Total	253	100.00%

ma la atención que más del 26 por ciento de los conflictos registrados hayan permanecido en el estado de amenazas. Los mecanismos dialógicos entre el gobierno (o actores ex-

tra-políticos como la ya mencionada Iglesia) y los sectores opositores habrían producido resultados de cierta manera efectivos para el control de la agitación social.

Intensidad del Conflicto:

INTENSIDAD	Frecuencia	Porcentaje
AMENAZAS	66	26.09%
BLOQUEOS	24	9.49%
DESALOJOS	3	1.19%
DETENCIONES	12	4.74%
ESTADO DE EMERGENCIA	2	0.79%
HERIDOS / MUERTOS	6	2.37%
INVASIONES	2	0.79%
JUICIOS	16	6.32%
MARCHAS	17	6.72%
PAROS / HUELGAS	39	15.42%
PROTESTAS	40	15.81%
SUSPENSION	16	6.32%
TOMAS	10	3.95%
Total	253	100.00%

En lo que concierne a las modalidades de procesamiento de los conflictos sociales en el período julio-octubre, y a las instancias estatales que se han hecho cargo de su manejo, se puede constatar la afirmación de una tendencia "negociadora" entre las partes dirimientes. Así, cerca del cincuenta y cinco por ciento de los conflictos ocurridos (5 puntos más que en el período anterior) han sido gestionados en torno de los mecanismos dialógicos fijados para el efecto y además con resultados favorables. Es satisfactorio además observar que los índices de

represión continúan a la baja (3%), factor que permite tener un margen de esperanza con respecto al mejoramiento del tema de los derechos humanos en el país.

Cabe resaltar, sin embargo, que aún subsiste un peligroso índice de conflictos sociales que no son procesados debidamente (más del 40%) y cuya administración es postergada ad infinitum: poderosa señal del escaso reconocimiento de la legitimidad de las acciones de protesta de los "múltiples otros" por parte de las instancias centrales de manejo de lo político-institucional.

Desenlace del Conflicto

DESENLACE	Frecuencia	Porcentaje
APLAZAMIENTO RESOLUCION	79	31.23%
NEGOCIACION	85	33.60%
NO RESOLUCION	27	10.67%
POSITIVO	54	21.34%
REPRESION	8	3.16%
Total	253	100.00%

Al analizar el cuadro sobre el tipo de intervención estatal desplegada para la gestión y resolución de los conflictos sociales ocurridos, cabe destacar los siguientes factores: a) el presidente continúa manteniendo un baja actuación en la negociación de los conflictos: su participación, al igual que en el período anterior, llega apenas al catorce por ciento de la negociación de la agitación producida; b) lo anterior no significa, sin embargo, que los espacios de gestión del conflicto se hayan localizado por fuera del poder Ejecutivo, precisamente son los ministros los mayores filtros de procesamiento de la turbulencia sociopolítica del país (casi el 20% de los conflictos registrados han sido pro-

cesados por ellos); c) llama la atención el poderoso aumento de la presencia de las fuerzas de control policial y militar en el manejo de los conflictos sociales (más del 21%, el doble que en el cuatrimestre anterior), situación que reflejaría una nueva delincencialización de la protesta social; d) la idea anterior es más dramática si se tiene en cuenta que, al revés de lo registrado en el período pasado, los gobiernos locales -municipios y consejos provinciales- han disminuido notablemente su participación en el manejo de los conflictos sociales, pues apenas han actuado en el cinco por ciento de éstos.

Intervención Estatal

INTERVENCIÓN	Frecuencia	Porcentaje
GOBIERNO PROVINCIAL	5	1.98%
JUDICIAL	32	12.65%
LEGISLATIVO	17	6.72%
MILITARES / POLICIA	15	5.93%
MINISTROS	49	19.37%
MUNICIPIO	8	3.16%
NO CORRESPONDE	50	19.76%
POLICIA	39	15.42%
PRESIDENTE	37	14.62%
TRIBUNAL GARANTIAS	1	0.40%
Total	253	100.00%

En suma, estamos frente a un escenario de vertiginosa pérdida de legitimidad del gobierno demócrata cristiano, descomposición política de sus mecanismos de negociación e interlocución con los actores sociales y políticos de oposición y sobre todo, pérdida de los espacios de representación, política y regional, que con estrecho margen dieron el triunfo a Mahuad en la campaña del 98. Si a este conjunto de factores se añade el reciente caso de corrupción en el uso de los fondos de financiamiento de la participación electoral de la Democracia Popular, la fragilidad institucional del sistema político sólo podrá continuar su intensificación.

Por todo esto mal puede uno leer la disminución de los conflictos socio-políticos, con respecto a los cuatrimestres anteriores, como un síntoma satisfactorio de recomposición del debate público o restauración de los mecanismos de articulación política entre los principales sujetos de la política nacional. Por el contrario, se puede arriesgar la tesis de que este apaciguamiento de la turbulencia social es una señal, depredadora y terrorífica, de una suerte de "naturalización" de la crisis política y económica: el estado de debacle del país, de sus instituciones, de sus ritmos productivos, de sus élites políticas, de su sociabilidad, habrían pasado a la esfera de

lo natural, del paisaje cotidiano, anodino, repetido y cansón. Los agentes sociales se paralizan, se habitúan, incorporan la contingencia y el deterioro como parte de su rutina práctica. De ahí el repunte del si-

lencio, la pausa dolorosa, el simulacro del reposo con que el epiléptico -el Estado y la nación- anuncia un nuevo ataque de mayor intensidad, tal vez, el último.

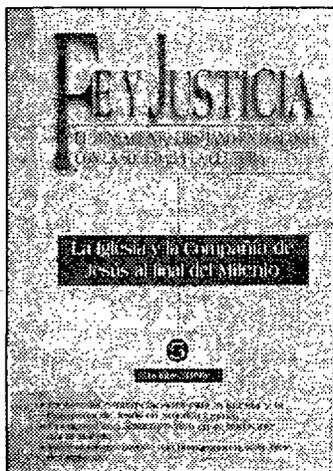
FE Y JUSTICIA

EL PENSAMIENTO CRISTIANO EN DIÁLOGO
CON LA SOCIEDAD Y LA CULTURA

5

Octubre, 1999

LA IGLESIA Y LA COMPAÑÍA DE JESÚS AL FINAL DEL MILENIO



CARTA DEL DIRECTOR: Re aprender a mirar los signos de los tiempos, ALLAN MENDOZA, S.J. **NUESTRA VOZ:** Los desafíos de la educación cristiana a las puertas del Tercer Milenio, PETER HANS KOLVENBACH, S.J. **Anulación de la deuda impagable, PROVINCIALES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, SOCIEDAD:** Momento Eclesial y nuevos desafíos, JOÃO BATISTA LIBANIO, S.J. **La Iglesia y la Compañía de Jesús en América Latina al final del Milenio,** ALBERTO PARRA, S.J. **Problemas e interpelaciones para la Iglesia y la Compañía de Jesús en América Latina,** JON SOBRINO, S.J. **Rasgos de la experiencia cristiana en una Iglesia que busca la justicia,** BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, S.J. **La buena noticia de Jesús ante la mala noticia del mundo,** JOSÉ IG-

NACIO GONZÁLEZ FAUS, S.J. **Encuentro con Jesucristo vivo en el horizonte del III Milenio,** PROYECTO PLAN GLOBAL DEL CELAM 1999-2003. **FE: Del Éxodo al Exilio,** VÍCTOR CODINA, S.J. **CULTURA: El cristianismo ¿ayuda a la humanidad a salir bien del siglo XX?,** LEONARDO BOFF.

FE Y JUSTICIA: Es una revista producida por la Compañía de Jesús.

Redacción: Autopista a los Chillos, Km 11,5 La Armenia, (Puente N° 9)

E-Mail: <cipal@interactive.net.ec> - Telefax: 341580 - 342076 - Casilla N° 17-08-8629
Quito-Ecuador